"Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: "En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, naciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada". Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20- RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra "a" de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular".

Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas; San Salvador Centro, a las catorce horas del día veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

I. Preámbulo.

Por recibido el escrito sin fecha, con referencia 50/931/2025 suscrito por el doctor [REDACTED] actuando en su calidad de Director Médico Especializado del Hospital Nacional Zacamil "Dr. Juan José Fernández", recibido materialmente en las instalaciones de este Tribunal en fecha veintiuno de enero de dos mil veinticinco, mediante el cual remite: i) Archivo de palanca desde 1 al 3 en el cual consta todo el proceso de contratación en original, correspondiente a la Licitación Competitiva No, 002/2025 denominado: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN-AUXILIARES DE LAVANDERIA-COSTURA-JARDINERÍA-MENSAJERIA INTERNA Y SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL USUARIO-PARA EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL AÑO 2025". ii) Archivo de palanca número 3 en el cual se encuentra Recurso de Revisión en Original interpuesto por parte de la sociedad [REDACTED] y el Recurso de Apelación por parte de la Sociedad [REDACTED], contra la resolución interna No. 007/2025.

En ese orden, este Tribunal realizará las consideraciones pertinentes relacionadas con el proceso de compra previamente delimitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 121 de la Ley de Compras Públicas -LCP- y 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas -RLCP-:

II. Antecedentes.

El Hospital Nacional Zacamil "Dr. Juan José Fernández", realizó el procedimiento de compra por Licitación Competitiva antes descrito. Como resultado, el Director Médico Especializado del Hospital emitió una resolución interna con fecha diez de enero de dos mil

veinticinco, en donde, entre otras cosas resolvió: “(...) b) REVOQUESE la resolución de adjudicación número 696/2024 de la LA LICITACIÓN COMPETITIVA N.º 002/2025: ‘SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN-AUXILIARES DE LAVANDERÍA-COSTURA-JARDINERÍA-MENSAJERÍA INTERNA Y SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL USUARIO- PARA EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL AÑO 2025’, en cual fue adjudicada a la sociedad [REDACTED]

d) ADJUDIQUESE de forma total a la sociedad [REDACTED] el ‘SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN-AUXILIARES DE LAVANDERÍA-COSTURA-JARDINERÍA-MENSAJERÍA INTERNA Y SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL USUARIO- PARA EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL AÑO 2025’, correspondiente a la LICITACIÓN COMPETITIVA N.º 002/2025. (...)” (Sic.)

III. Acto impugnado.

En su escrito la apelante, expone el acto sobre el cual interpone el recurso de Apelación, relacionándolo de la siguiente forma:

“(...) la resolución del recurso de revisión antes citado, la cual fue emitida en el Distrito de Mejicanos municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día diez de enero de dos mil veinticinco, por el Doctor [REDACTED] en su calidad de Director Médico Especializado, del Hospital Nacional Zacamil; (...)” (Sic.)

IV. Examen liminar del escrito de apelación.

La apelante interpuso en fecha diecisiete de enero del presente año, RECURSO DE APELACIÓN en el proceso de Licitación Competitiva relacionado previamente, llevado a cabo por el Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández”.

En ese sentido, la apelante ha utilizado un mecanismo de impugnación previsto en la LCP en su artículo 121; no obstante, el ejercicio de dicho derecho se encuentra sujeto a

ciertos requisitos formales y procedimentales, que establece la misma LCP y el RLCP, lo anterior, para que este Tribunal analice el origen y el fondo de sus alegaciones.

V. Argumentos de la apelante:

Si bien se otorga a los oferentes la oportunidad de poder impugnar los actos administrativos y que un tribunal superior en grado controle las mismas, la ley se encarga de situar límites para que su ejercicio no cause un entorpecimiento del proceso de compra. Esas condiciones son los presupuestos estatuidos en la LCP, RLCP, Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas y la Ley de Procedimientos Administrativos -LPA- para que prospere eficazmente el recurso, uno de los cuales es la apropiada *exposición y fundamentación de agravios*.

De la lectura del memorial impugnativo, se logra extraer que la apelante alega -entre otras cosas- la vulneración de los principios de razonabilidad de precios, proporcionalidad, *in dubio pro administrado*, legalidad, racionalidad del gasto público, eficacia y eficiencia.

VI. Breves aspectos doctrinarios y jurisprudenciales de los recursos:

La doctrina más autorizada del Derecho Administrativo, ha sostenido que: *“Un recurso administrativo es un medio de revisión de los actos inválidos por la Administración; iniciado a instancia de parte por un sujeto legitimado para ello y sujeto a un plazo de interposición. (...) La interposición del recurso inicia un procedimiento administrativo “de segundo grado”, en el cual la propia Administración autora del acto impugnado, o excepcionalmente otra Administración en ejercicio de funciones de control, revisa la legalidad del acto objeto de impugnación. Las notas características de los recursos administrativos son las siguiente: a) El recurso se interpone a instancia de parte (...). b) El recurso solo puede interponerlo quien se encuentre legitimado (...). c) Los recursos administrativos están sujetos a plazos de interposición (...)”* (GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho Administrativo, 9ª Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p. 513)

En esta misma línea de pensamiento, jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha aseverado que *“los recursos son los instrumentos que la ley provee para la impugnación de las resoluciones, afectados de errores de fondo o de forma en que se haya incurrido al dictarlas. Constituyen entonces, una garantía para los afectados por actuaciones de la Administración, en la medida que les asegura la posibilidad de reaccionar ante ellas, y eventualmente, de eliminar el perjuicio que comportan.*

Para hacer efectivo el referido control, la ley crea expresamente la figura del recurso administrativo como un medio de defensa para deducir, ante un órgano administrativo, una pretensión de modificación, revocación o anulación de un acto dictado por ese órgano o por un inferior jerárquico. Los recursos administrativos se convierten en la vía utilizada por los administrados para solicitar a la Administración Pública la modificación de una resolución administrativa que afecta su esfera jurídica, y que se considera ilegal. (...)” Aunado a lo expresado, dicho tribunal también ha reiterado que en materia contencioso administrativa, los recursos administrativos juegan un papel fundamental, en tanto nuestro ordenamiento jurídico exige el correcto agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de procesabilidad para acceder a la vía judicial, el cual consiste en *“ el ejercicio de los recursos pertinentes (en tiempo y forma) en sede administrativa, dando la oportunidad a la Administración Pública de revisar nuevamente sus actuaciones. (...) Esto implica que aun cuando los recursos administrativos han sido instituidos en beneficio del administrado y, por consiguiente, las reglas que regulan su funcionamiento han de ser interpretadas en forma tal que faciliten su aplicación, estos no pueden ser tenidos como una herramienta procesal a disposición del libre arbitrio de las partes. Fundamentalmente, es el principio de seguridad jurídica el que exige que los recursos sean utilizados con plena observancia de la normativa que los regula, esto es, respetando los requisitos de forma y plazo.”* (Sentencia definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el proceso marcado bajo la ref. 240-2016 del 12/XII/2019).

En este contexto, resulta palpable que, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo coinciden en reconocer el carácter instrumental del

recurso administrativo, como herramienta de configuración legal para que, la Administración Pública revise sus propios actos administrativos, en tanto estos pueden contener errores de fondo o forma, constituyéndose así en una garantía para los administrados, pero a su vez contiene reglas que regulan su funcionamiento, debiendo ser utilizados con plena observancia en la normativa que los regula, esto es, respetando los requisitos de forma y plazo instaurados para su ejercicio, asimismo, se deberá respetar el procedimiento para su interposición tal como lo dispone la Ley de Compras Públicas y su reglamento.

VII. Inadmisibilidad del recurso de apelación.

El examen liminar del memorial recursivo compone un mecanismo de control mediante el cual el ente facultado para conocer y resolver sobre la controversia alegada por el impetrante, verifica el cumplimiento de los requisitos legales que debe contener el escrito mediante el cual el agraviado interpone el recurso de apelación, con el fin de verificar que el impetrante haya configurado adecuadamente su pretensión, delimitando así el objeto del procedimiento, en tanto que de no reunir los requisitos legales establecidos por el ordenamiento jurídico, es imposible conocer del fondo de la pretensión planteada, ya que uno de sus elementos esenciales *-jurídico o fáctico-* no estaría configurado.

En relación con lo anterior, la Cámara de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 19 de noviembre de 2018, proceso con referencia 00134-18-ST-CORA-CAM ha sostenido que la finalidad de la inadmisibilidad *“es evitar inconvenientes futuros derivados de las deficiencias de forma en la demanda y contar con todos los elementos necesarios para emitir una decisión de fondo (...)”*.

Si bien se ha otorgado a los oferentes la oportunidad de poder impugnar los actos administrativos y que un Tribunal superior en grado controle las mismas, la Ley se encarga de situar límites para que su ejercicio no cause un entorpecimiento del proceso de compra. Esas condiciones son los presupuestos estatuidos en la Ley de Compras Públicas,

Reglamento de la Ley de Compras Públicas, Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas y la Ley de Procedimientos Administrativos.

Ahora bien, como un paso previo a que este Tribunal valore el fondo del recurso y los argumentos planteados por el apelante, es preciso realizar un examen de los requisitos de establecidos en la Ley para valorar la admisibilidad o no del recurso, relacionado con los criterios pronunciados en las diferentes resoluciones del Tribunal.

En ese sentido, la facultad de recurrir en apelación se encuentra establecida en la Ley de Compras Públicas y en el Reglamento de la Ley de Compras Públicas, legislación que establece principios elementales del procedimiento y límites determinantes subjetivos y objetivos sobre las resoluciones que admiten apelación para que su ejercicio no redunde en un entorpecimiento del proceso, aunado con ello, se debe generar claridad, motivación y fundamentación en los recursos con la finalidad de que el Tribunal conozca sobre el fondo del asunto, así tenemos que:

La técnica recursiva fijada por el legislador implica que los impetrantes deben formular su memorial en los términos siguientes: a. La identificación del vicio, su naturaleza y el acto administrativo del cual se recurre, b. El fundamento legal específico de su impugnación, los fundamentos de hecho, c. La exposición de agravios, y d. La solución que se pretende.

En relación con lo anterior, como parte del cumplimiento de los presupuestos habilitantes para que los oferentes accedan a la fase recursiva en el procedimiento administrativo, los mismos deben identificar el acto del cual se recurre, y su memorial impugnativo debe cumplir con una serie de presupuestos o requisitos que le permitan a la autoridad competente conocer del fondo de lo que se pretende, dentro de estos requisitos se encuentra la identificación del *agravio directo* ocasionado por el acto administrativo que se impugna. El agravio es una categoría jurídica que debe entenderse de acuerdo a la jurisprudencia como: una condición material habilitante de los medios de impugnación.

Ahora bien, con relación a lo anterior la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de referencia 371-2013, ha manifestado que *“La legitimación de la parte actora deriva del agravio real y efectivo sufrido como consecuencia del acto cuya ilegalidad reclama. Así, al no existir agravio alguno en el acto administrativo emitido por parte de la Administración Pública, se incumple el supuesto de ley que exige que para ser sujeto activo en el proceso contencioso es menester ser titular de un derecho o interés legítimo que ha sido infringido por la Administración Pública.”*

Por lo que la legitimidad de impugnar un acto nace de la relación entre el recurrente y el acto que le afecta, el cual causa una alteración a su esfera jurídica, por lo que los administrados se encuentran legitimados para impugnar aquellos actos que les causen lesiones o afectaciones, es decir *agravios*.

Teniendo claro el escenario anterior, además de la necesidad de que el recurrente sea capaz de identificar el agravio que le causa la resolución impugnada, el mismo debe encontrarse debidamente fundamentado, dicho requisito es necesario para que este Tribunal de alzada conozca sobre el fondo del asunto, en virtud de que, como lo ha establecido la Sala de lo Contencioso Administrativo en la resolución 259-2012 de fecha 05-01-2022, uno de los requisitos ineludibles que el apelante debe cumplir es la debida formulación de lo antes mencionado y de *“no cumplirse y explicarse debidamente, haría presumir la existencia de cualquier otra petición diferente a la de impugnación. Además, la existencia y fundamentación del agravio es un elemento indispensable para legitimar procedimentalmente al sujeto agraviado en el procedimiento de apelación...”*.

Asimismo, respecto al *agravio* la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha expresado mediante la Sentencia emitida a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día veintitrés de octubre de dos mil veintitrés que *“(…) la existencia del agravio personal y directo producto del acto administrativo adversado, determinará la procedencia de la pretensión”*.

Sin embargo, en razón de lo antes descrito, del memorial recursivo suscrito por el apelante no se logra vislumbrar fundamentación alguna que sostenga su pretensión, y asimismo, no ha identificado cuál es el agravio que le ha ocasionado la resolución impugnada, omitiendo realizar una fundamentación tendiente a desvirtuar la decisión contenida en la resolución del recurso de revisión, la cual es el objeto de impugnación en esta instancia, por lo que, el apelante no advierte la existencia de un equívoco por parte del A Quo, sino más bien, se limita a demostrar su inconformidad con el resultado de la evaluación realizada por la Comisión Técnica de Evaluadores y la CEAN, actos administrativos que no son objeto de impugnación ante este Tribunal.

Es así como el escrito venido en apelación incumple con lo dispuesto en el artículo 74 número 3 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y en consecuencia se configura y habilita un motivo de rechazo del recurso interpuesto ante esta instancia de acuerdo con el art. 75 número 4 del mismo cuerpo legal.

Aunado con lo anterior, es oportuno mencionar lo establecido por la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante auto de 2 junio de 2016, proceso con referencia 56-2016 *"es obligación del actor identificar en la demanda el derecho o derechos que considera violados y que estén protegidos por las disposiciones legales secundarias en que se funde su pretensión. Este requisito se cumple por medio de una argumentación suficiente que permita identificar el fundamento jurídico de la pretensión planteada [que será parámetro de control del acto administrativo impugnado] por lo que **no basta denunciar en abstracto la violación a determinados derechos o categorías Jurídicas**, sino que es obligación de la parte impetrante fijarle al juez tanto el parámetro de control, como el objeto de control; el nexo entre ambos elementos, lo establece la parte actora por medio de las razones o argumentos jurídicos que este considera se violaron con la emisión del acto impugnado [objeto de control]."* [Resaltado de este Tribunal]

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia pronunciada a las quince horas del día cinco de enero del año dos mil veintidós, en el proceso referencia

259- 2012, ha sostenido que: " ... *En definitiva, esta Sala considera que son dos los requisitos esenciales e ineludibles que el administrado debe cumplir para poder acceder al recurso de apelación: (a) el requisito temporal que, de no cumplirse, se presumirá la aquiescencia del acto de gravamen por parte del administrado; y, conforme a la jurisprudencia del referido proceso 27-T-99, (b) la existencia del Agravio del acto impugnado en la esfera jurídica del recurrente que, de no cumplirse y explicarse debidamente, haría presumir la existencia de cualquier otra petición diferente a la de impugnación. Además, la existencia y fundamentación del agravio es un elemento indispensable para legitimar procedimentalmente al sujeto agraviado en el procedimiento de apelación ... "*

En atención con los fundamentos antes expuestos, este Tribunal considera que los motivos de impugnación deben encontrarse debidamente desarrollados y fundamentados, además, los mismos deben versar -como se ha reiterado- sobre la resolución que admite el recurso de apelación, es decir el acto mediante el cual se resuelve el recurso de revisión.

Aunado con lo anterior, dicha cuestión no puede prevenirse, porque podría generarse la posibilidad que el recurrente formulara otro motivo de impugnación, fuera de la oportunidad dispuesta en la normativa de la LCP y RLCP.

En esa línea, una apelación en tales términos, espera que el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas supla la expresión del agravio ocasionado por la primera instancia, situación que se encuentra prohibida por el principio de imparcialidad, y es que, pese a la existencia del principio *Jura Novit Curia* (de Derecho conocen los Jueces) que posibilita la suplencia de la queja deficiente, tal mandato lo que faculta es a reconducir la exposición de un recurso deficiente, mas no a configurar la exposición de un agravio y la delimitación de competencia, por lo que, a la impugnación no corresponde un pronunciamiento sobre su contenido, sino más bien, un rechazo "*in limine litis*" a través de su inadmisibilidad, por lo que en consecuencia el presente recurso se rechazará.

POR TANTO; con base en lo antes expuesto y con fundamento en los Artículos, 73, 116, 121 y 122 de la LCP; 73, 74 y 75 Reglamento de la Ley de Compras Públicas; 13 inciso 2

de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas; 65, 98 número 1, y 125 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los suscritos miembros del Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, en uso de sus facultades, **RESUELVEN:**

- a) **DECLÁRESE INADMISIBLE** el recurso de apelación interpuesto por la señora [REDACTED] [REDACTED] en calidad de Administradora Única Propietaria y Representante Legal de la sociedad [REDACTED] [REDACTED] que puede abreviarse [REDACTED], en el proceso de proceso de contratación por Licitación Competitiva No, 002/2025 denominado: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN-AUXILIARES DE LAVANDERIA-COSTURA-JARDINERÍA-MENSAJERIA INTERNA Y SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL USUARIO-PARA EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL AÑO 2025"; por las razones antes expuestas.
- b) **REMÍTASE** certificación de la presente resolución junto con el expediente original del proceso de compra previamente descrito al Hospital Nacional Zacamil "Dr. Juan José Fernández".
- c) **DECLÁRESE agotada la vía administrativa**, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Compras Públicas.

NOTIFÍQUESE. –

---FIRMAS ILEGIBLES---